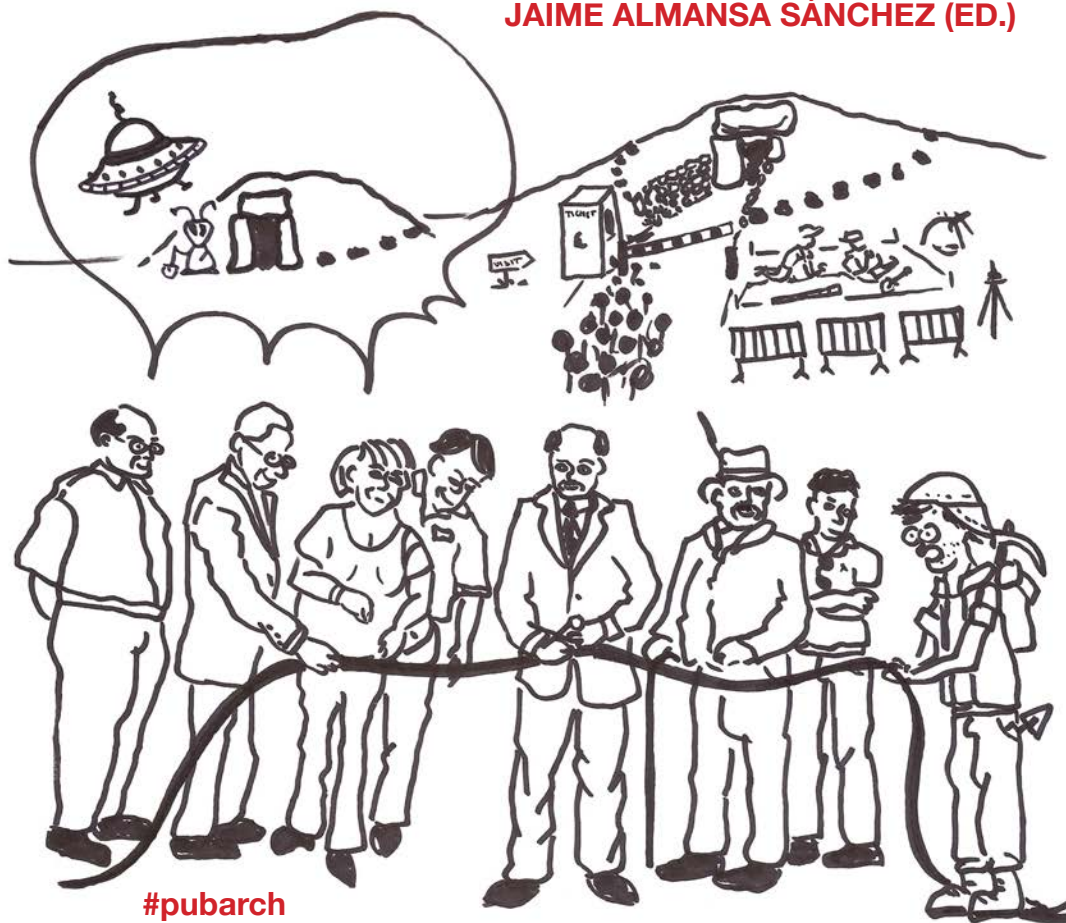


ARQUEOLOGÍA PÚBLICA EN ESPAÑA

JAIME ALMANSA SÁNCHEZ (ED.)



#pubarch



Todos los derechos reservados. El contenido de esta obra está protegido por Ley. Queda totalmente prohibida cualquier forma de reproducción de la misma, sin consentimiento expreso del editor. Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase al Editor www.jasarqueologia.es

Primera Edición, diciembre de 2013

© De la edición:

JAS Arqueología S.L.U.

Plaza de Mondariz, 6

28029 - Madrid

www.jasarqueologia.es

Editor: Jaime Almansa Sánchez

Corrector: David Andrés Castillo

© Del texto:

Los Autores

© De la imagen de portada:

Juany Medina Rodríguez

ISBN: 978-84-941030-3-2 (papel) / 978-84-941030-4-9 (electrónica)

Depósito Legal: M-36562-2013

Imprime: Service Point

www.servicepoint.es

Impreso y hecho en España - Printed and made in Spain

Del precariado a la nada

La situación laboral de la Arqueología Comercial en el Estado Español a comienzos del s. XXI

David González Álvarez

Departamento de Prehistoria
Universidad Complutense de Madrid

1. Introducción

En las últimas dos décadas, las actuaciones arqueológicas desarrolladas desde el ámbito empresarial –desconectadas en su mayor parte de las universidades y los Organismos Públicos de Investigación (OPIs)– han supuesto el mayor porcentaje de las intervenciones arqueológicas efectuadas en el estado español. Estas actividades han involucrando a una cantidad masiva de profesionales y técnicos especialistas, y han obteniendo ingentes volúmenes de datos arqueológicos que han permitido relaborar las narrativas históricas de múltiples períodos y territorios. Por ello, analizar la economía política y el proceso de conformación del ámbito productivo y profesional de la Arqueología comercial, reflexionar críticamente acerca de los problemas del sector y aportar ideas de mejora son líneas de acción necesarias en nuestra disciplina que intentaremos abordar en el presente trabajo.

En relación a la caracterización del sector de la Arqueología comercial en el estado español, existen abundantes trabajos centrados en cuestiones técnicas y procedimentales, en el modelo de gestión o el marco legislativo de este sector de actividad económica (Arnaiz *et al.* 2009; Castillo 2004; Cerdeño

et al. 2005; Criado 1996; Criado *et al.* 2004; Domínguez Alonso *et al.* 1994; Parga-Dans 2010c; Querol 2000, 2010; Querol y Martínez Díaz 1996; Rodríguez Temiño 2004; Vidal 2005). Dichos estudios ofrecen valoraciones semejantes a trabajos sobre las realidades en otros estados europeos (Bozóki-Ernyey 2007; Ciuchini 2010; Cumberpatch y Blinkhorm 2001; Demoule 2012; Kristiansen 2009; Webley *et al.* 2012). Las especificidades de la práctica arqueológica en las distintas Comunidades Autónomas (CCAA) del estado español hacen comprensible que buena parte de las aproximaciones al campo profesional y sectorial de la Arqueología comercial se hayan realizado a escala autonómica/regional (Benítez de Lugo 2011; Cacheda 2007; Martínez Díaz 2007; Montero Gutiérrez 2006-2007; Morín de Pablos *et al.* 2008; Peral Bejarano 1994; Salvatierra 1994). Además, en los últimos años se han producido reflexiones que relacionan al auge y caída de la Arqueología comercial en el estado español con el crecimiento y estallido de la “burbuja inmobiliaria” española. Estos trabajos señalan las debilidades estructurales, las carencias técnicas, legislativas y de aplicabilidad en la Gestión efectiva del Patrimonio arqueológico (CNT-Barcelona 2012; CNT-Córdoba 2010, 2011; Díaz del Río 2000; González Álvarez 2010; Parga-Dans 2010a; Rufino 2012; Vigil-Escalera 2011); valoraciones convergentes con trabajos realizados en otros países occidentales (Aitchison 2009; Kador 2011; La Salle y Hutchings 2012; Schlanger y Aitchison 2010; Zorzin 2011).

Sin embargo, buena parte de estas aproximaciones ofrecen visiones igualadoras de la Arqueología comercial, en el sentido de que tratan dicho sector con una perspectiva analítica centrada en preocupaciones “disciplinares”, como los fallos o aciertos de los modelos de gestión patrimonial, las complejas relaciones entre la vertiente comercial y el ámbito académico-universitario de la Arqueología o la relevancia social de la práctica arqueológica. Tales acercamientos evitan descender a las particularidades e intereses individuales de las personas involucradas en el desarrollo de esta actividad profesional. Por ello, obvian los problemas y conflictos internos de los distintos

agentes implicados, en ocasiones enfrentados: funcionarios, técnicos contratados e interinos de las administraciones públicas, grandes, medianos y pequeños empresarios, socios de cooperativas de trabajadores, trabajadores por cuenta ajena contratados bajo marcos normativos muy diversos, profesionales autónomos, “falsos autónomos”, becarios, estudiantes universitarios en prácticas, trabajadores de ETTs, participantes en escuelas-taller, etc.

Ante esta enorme diversidad de situaciones e intereses, conviene resaltar que no todos los problemas del sector afectan a todo el colectivo por igual. Más aún, las posiciones enfrentadas entre los diversos protagonistas del sector reflejan dinámicas sociales y políticas que conviene examinar con detalle por su relevancia en la práctica arqueológica. Sólo a través de estos análisis críticos podremos comprender en toda su complejidad los contextos de producción de conocimiento arqueológico más importantes del campo científico de la Arqueología española (*sensu* Bourdieu 1999), al menos hasta el estallido de la “burbuja inmobiliaria”. En este punto, es justo dar crédito a aquellas aproximaciones que sí han contemplado algunas de estas problemáticas, en especial las relacionadas con la precariedad sociolaboral de los trabajadores del sector (AMTTA 2008; García Casas 2007; González Álvarez 2012; Moya Maleno 2010)¹.

Con estos referentes previos, tres objetivos centrales focalizarán nuestra atención en este trabajo. En primer lugar, señalaremos algunos de los problemas sociolaborales que

¹ Aunque el presente trabajo esté firmado por una sola persona, las ideas aquí recogidas son deudoras de conversaciones mantenidas con multitud de compañeros de profesión. Por ello, y como muestra de agradecimiento hacia mis colegas, la redacción de este texto adopta la primera persona del plural. Ciertos contextos horizontales de debate y trabajo cooperativo han contribuido sobremanera a formular algunas de las reflexiones y propuestas aquí expuestas. En concreto, quiero destacar –por su papel trascendental como catalizadores para la crítica– las asambleas abiertas de la *Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología* (AMTTA) y el trabajo desarrollado en el seno de la *Organización de Jóvenes en Investigación Arqueológica* (OrJIA) de la UCM, así como la participación en las estimulantes cinco primeras ediciones de las *Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica* (JIA), celebradas en Madrid (2008 y 2009), Barcelona (2010), Faro (2011) y Santiago de Compostela (2012).

sufren los trabajadores del sector de la Arqueología comercial. Además, discutiremos las implicaciones de dichos conflictos en las prácticas de Gestión del Patrimonio arqueológico y en los procesos de construcción de conocimiento. Por último, apuntaremos posibles vías de resolución sin perder de vista la compleja situación de crisis económica en la que se haya inmerso el sistema productivo estatal.

2. Los inicios de la Arqueología comercial en el estado español

Tras la muerte de Franco en 1975, se inició un proceso de transición hacia la democracia que dio lugar a la tentativa de crear un estado moderno en España. Este proceso dotó al estado de nuevas bases legislativas e institucionales, a la vez que consolidaba su aparato técnico y administrativo. Las reformas trataban de superar el largo período dictatorial iniciado con el golpe de estado de 1936 para acercar el país al orden político de Europa Occidental. La incorporación del estado español a la Unión Europea y llevar a su ciudadanía hacia un “estado del bienestar” constituían los objetivos fundamentales de los primeros gobiernos democráticos.

Entre las nuevas normas y leyes, el Patrimonio arqueológico encontraría un nuevo marco regulador en la *Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español* promulgada por el primer gobierno socialista y que desarrollaba el artículo 46 de la *Constitución española* de 1978. Su aprobación y la aplicación de sus preceptos en posteriores regulaciones, como el *Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental* y su reglamento ejecutor, aprobado mediante el *Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre*, generaron un nuevo escenario normativo que modificó por completo la práctica arqueológica en el estado español. La Ley 16/1985 establece que las administraciones públicas han de asegurar la protección y conservación de los bienes de valor histórico —entre ellos los elementos arqueológicos— y apunta la necesidad de adoptar una serie de medidas de protección que

requieren la aplicación de métodos científicos para prevenir o corregir posibles afecciones negativas.

Hasta entonces, la arqueología había sido una actividad prácticamente restringida a los departamentos universitarios, museos y OPIs. La promulgación de la Ley 16/1985 abriría la puerta a que técnicos y especialistas ajenos a estos organismos comenzasen a prestar servicios relacionados con la Gestión del Patrimonio arqueológico (Querol y Martínez Díaz 1996). Así, surgió un extenso tejido de empresas, cooperativas y profesionales autónomos que generaron un nuevo nicho de empleo para licenciados y doctores en Historia u otras titulaciones afines, técnicos de disciplinas auxiliares y personal no cualificado.

Esta nueva realidad profesional fue rápidamente segregada respecto a la actividad arqueológica desarrollada a la sombra de las instituciones académicas, recibiendo múltiples denominaciones, más o menos acertadas, como Arqueología “de gestión”, “de urgencia”, “profesional”, “preventiva”, “de empresa”, “contractual”, “liberal”, “privada”... De entre ellas, quizá la denominación más adecuada sería la de “Arqueología comercial”, definida como la *actividad que se genera en torno al Patrimonio Arqueológico cuando una gestión adecuada del mismo demanda la realización de actuaciones específicas que generalmente se desarrollan bajo contrato y, en todo caso, cumpliendo un determinado servicio y cobrando por él* (Criado 1996).

3. La consolidación de la Arqueología comercial en la España de las Autonomías

Tras sus inicios a finales de la década de 1980, el sector de la Arqueología comercial se consolidó en el siguiente decenio, en paralelo al proceso de descentralización del estado español. El desarrollo de los términos dispuestos por la Constitución de 1978 y la progresiva promulgación de los Estatutos de Autonomía derivó en la transferencia de

competencias desde las administraciones centrales a las CCAA. En este marco, la Gestión del Patrimonio arqueológico, entre otros temas culturales, fue rápidamente asumida por las CCAA, cuyos gobiernos y jóvenes administraciones iniciaban entonces voraces procesos de construcción identitaria que refrendasen las posiciones de poder recientemente adquiridas. Seguirían con tal fin prácticas relacionables con los procesos de “invención de la tradición” (Hobsbawn y Ranger 1992) en los que la mitificación y la exaltación del pasado juegan un papel central en el sostenimiento de las nuevas construcciones político-administrativas, lo cual afectaría también a la práctica arqueológica (Díaz-Andreu 1995; González Morales 1994; Marín Suárez *et al.* 2012; Ruiz Zapatero 2006). Este modelo atomizado de Gestión del Patrimonio provocaría que los distintos gobiernos autonómicos se apresurasen a desarrollar su propia normativa rectora del Patrimonio arqueológico, constituyendo en paralelo sus servicios territoriales de Arqueología.

El resultado final se puede resumir en un mosaico compuesto por 17 parcelas de distinto tamaño en las que las administraciones autonómicas pautan la práctica cotidiana de la Arqueología comercial con mayor o menor dependencia de las agendas políticas de los partidos gobernantes. En este escenario, las normas y los agentes involucrados en la Gestión del Patrimonio de cada territorio generan situaciones sorprendentemente divergentes en cuanto a criterios técnicos, como las solicitudes de permisos o el seguimiento administrativo de las actuaciones arqueológicas. La variabilidad de cada una de esas células estancas se conjuga además con otros asuntos más complejos como las relaciones de poder establecidas en el reducido y endogámico campo científico de la Arqueología. A los procesos de especulación/acumulación de capital científico/simbólico (*sensu* Bourdieu 2008) se les suma en el ámbito particular de la Arqueología comercial la libre competencia de mercado en un contexto bastante desregularizado. Todos estos factores condicionan las particularidades de cada caso regional.

4. Arqueología comercial y “burbuja inmobiliaria”: auge y caída

Sin ánimo de redundar en las reflexiones ya planteadas en aproximaciones precedentes sobre el funcionamiento de la Arqueología comercial española (Barreiro 2006; Criado 1996; Díaz del Río 2000; Parga-Dans 2010c; Querol 2000), rescatar algunas de estas consideraciones nos ayudará a contextualizar los problemas centrales que abordamos en este trabajo.

En concordancia con las directrices del *Convenio Europeo sobre la Protección del Patrimonio Arqueológico de La Valetta* (1992), el marco legislativo y administrativo en torno al Patrimonio cultural parte en España de la máxima *quien destruye paga*, lo que condiciona el contexto de actuación para la Arqueología comercial². Así, ante el riesgo –real o potencial– de que una obra o actuación urbanística afecte de alguna manera a restos arqueológicos –conocidos o por conocer–, las empresas constructoras, las promotoras inmobiliarias o los propietarios de los terrenos, según los casos, han de costear la realización de determinadas actuaciones arqueológicas por parte de empresas, cooperativas o profesionales autónomos. Estos servicios arqueológicos han de evaluar las afecciones patrimoniales y desarrollar las medidas correctoras necesarias que garanticen la protección y/o documentación del registro arqueológico existente.

Tales trabajos son supervisados por las administraciones competentes en la protección y conservación del Patrimonio arqueológico, aunque paradójicamente las sociedades o los profesionales autónomos cobran directamente de los promotores de dichas obras. El punto final de estas actuaciones es la obtención de un informe favorable emitido por la administración pública que reconozca que las obras pueden continuar su curso, una vez corregidas o aminoradas las afecciones sobre los restos arqueológicos. Por lo tanto, el ejercicio profesional

2 Pese a que el gobierno español firmó dicho tratado en 1992, la ratificación definitiva se hizo esperar casi 20 años, hasta su publicación en el B.O.E. nº173, de 20 de julio de 2011.

del arqueólogo se convierte en una mera actividad técnica con un objetivo burocrático-administrativo que prevalece sobre la generación de conocimiento histórico o la socialización del Patrimonio. En palabras de Pedro Díaz del Río, *el papel del arqueólogo comercial dentro de las relaciones de producción es básicamente el de ofrecer un servicio especializado que permite liberar suelo urbanizable, implicándose en la producción general de plusvalía* (2000: 14). Así, las actuaciones arqueológicas son un *coste añadido* más del proceso administrativo para liberar *terreno* y transformarlo en *suelo* y sobre ellas rigen las leyes de oferta y demanda propias del libre mercado.

Esta deriva de la actividad arqueológica desde unos presupuestos generadores de conocimiento histórico a unos objetivos meramente administrativos se vio particularmente espoleada por la vorágine constructiva y urbanizadora de las décadas de 1990 y 2000 en el estado español. Entonces se produjo el momento álgido de la burbuja inmobiliaria (Brandis García 2010; Calvo López *et al.* 2007; Campos Echeverría 2008; Observatorio Metropolitano 2009: 53-65, 2013), con el desarrollo de grandes infraestructuras y extensas recalificaciones urbanísticas que dispararon la cantidad de actuaciones arqueológicas ejecutadas en todo el país con especial incidencia en el litoral mediterráneo y en grandes conurbaciones como Madrid (Castillo 2007; Martínez Díaz 2007; Parga-Dans 2010c: 179-182). A ello, se sumaba la implantación y progresiva depuración de las leyes y normativas en materia de protección del Patrimonio arqueológico (Querol 2010; Querol y Martínez Díaz 1996; Rodríguez Temiño 2004). El tremendo crecimiento de las actividades que demandaban sus servicios hizo que las dimensiones del sector –en cuanto a carga de trabajo, volumen de empleo y facturación– y las tasas de ganancia de estas mismas empresas alcanzasen cifras insólitas.

El sector empresarial de la Arqueología comercial vio desbordadas sus posibilidades de negocio, pues el viciado funcionamiento del sector como mero instrumento técnico-burocrático en la liberalización de suelo (*sensu* Díaz del Río 2000) exigía la contratación de un volumen de fuerza de trabajo superior a la disponibilidad de personal cualificado y redundaba

en pingües beneficios para las sociedades y profesionales más avezados. Pero este gaseoso ascenso tocaría a su fin con el colapso del frágil modelo expansivo de la economía española, basado por completo en el ladrillo y la especulación urbanística (Navarro *et al.* 2011). La recesión económica que se inició a finales de la década de 2000 hizo que el sector despertase incrédulo de su sueño de color de rosa. Tras el cese del crecimiento desmedido en el sector de la construcción y con el estallido de la crisis financiera (Rodríguez López y López Hernández 2011), el endeble sector de la Arqueología se derrumbó cual castillo de naipes y las posibilidades de empleo se han reducido drásticamente (Parga-Dans 2010a; Vigil-Escalera 2011: 17-18), incluso para los trabajadores más experimentados.

5. Los problemas sociolaborales de una práctica comercial liberalizada

Los trabajadores de la Arqueología comercial desarrollan su trabajo en una situación marcada, por lo general, por la precariedad y la desregulación en materia sociolaboral. El rango de situaciones individuales es bastante amplio, debido a la diversidad existente en los modelos organizativos de la actividad económica, por lo que es conveniente examinar las distintas opciones existentes en el panorama español.

Por un lado, existen empresas y cooperativas con volúmenes de facturación y escalas de actuación diversas que cuentan con un número variable de trabajadores por cuenta ajena en plantilla. Este escenario ha sido examinado en detalle por Eva Parga-Dans (2010b, 2010c), cuya investigación nos ha proporcionado por vez primera un encuadre general que nos permite calibrar con cifras concretas la importancia y las características del escenario empresarial de la Arqueología comercial en el estado español. No obstante, la desregulación y laxitud organizativa del sector provocan que no todas las variables hayan sido consideradas en su estudio, por lo que la imagen derivada de éste ha de tomarse como una aproximación incompleta –la más seria hasta la fecha– a la organización laboral del sector.

Así, junto a las sociedades con trabajadores por cuenta ajena, conviven otras fórmulas empresariales y de contratación que escapan al citado estudio. Por un lado, muchos profesionales del sector son verdaderos trabajadores por cuenta propia inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. Estos profesionales acometen trabajos de pequeña escala o prestan sus servicios a empresas de Arqueología comercial. Al mismo tiempo, ciertas empresas o sociedades promueven prácticas de contratación dudosas, o directamente irregulares, empleando en sus actividades empresariales a “falsos autónomos” y/o eternos becarios “en formación”. Además, nos encontramos con casos aislados de empresas constructoras, administraciones públicas u OPIs que cuentan con divisiones de personal que realizan trabajos de Arqueología comercial. Por lo tanto, el rango de opciones de empleabilidad a considerar es muy diverso en el sector de la Arqueología comercial del estado español, y dicho abanico se amplía aún más si introducimos las divergencias que podemos encontrar entre diferentes CCAA en relación a las distintas dinámicas productivas o a diferencias legislativas.

En general, la inexistencia de un convenio colectivo propio para la Arqueología en la mayor parte de las CCAA –sólo existe en Cataluña, Galicia, Castilla y León y Comunidad Valenciana– amplifica la precariedad y la indefinición laboral para los trabajadores por cuenta ajena y propicia que algunas empresas abusen de fórmulas dudosas como los “falsos autónomos”. Al no existir convenios, no existen categorías laborales bien definidas con tablas salariales asociadas que recojan los cometidos y requisitos precisos para cada puesto de trabajo –necesidades formativas, destrezas determinadas o experiencia laboral previa– o las condiciones de promoción, impidiendo así la existencia de una carrera profesional clara para los profesionales del sector³.

3 La existencia de Convenios sectoriales ni siquiera soluciona algunos de estos problemas. Debido a ciertas imprecisiones y vacíos en su articulado, aún en las CCAA que cuentan con convenios vigentes no se han resuelto problemas como la indefinición de la carrera profesional del sector. Por ejemplo, la existencia de categorías laborales poco claras, como sucede con el “arqueólogo de empresa” del convenio vigente en Galicia (Moya Maleno 2010: 21), pervierte la utilidad y la aplicabilidad de estas regulaciones laborales.

La movilidad, el derecho a dietas por desplazamiento o la disponibilidad del trabajador fuera de la jornada habitual tampoco quedan regulados, facilitando los abusos por parte de la parte empleadora. A la vez, la inexistencia de convenios provoca que se carezca de normas de seguridad e higiene adaptadas a la propia realidad laboral de la Arqueología.

Los salarios en la Arqueología comercial son muy bajos, generalmente alejados de las tablas salariales de otras profesiones cercanas. Los sueldos suelen maquillarse a través del prorrateo de las pagas extras o mediante la retribución monetaria de vacaciones no disfrutadas. En paralelo, las horas extraordinarias dedicadas a elaborar informes y memorias no suelen remunerarse. Por ello, a medio/largo plazo muchos profesionales abandonan su trayectoria laboral en favor de otras opciones laborales mejor pagadas.

Pero si la situación era mala, el futuro es aún peor tras las reformas laborales introducidas por el gobierno conservador de Mariano Rajoy. Más allá de abaratar el despido, la “contrarreforma laboral” contenida en el RD-Ley 3/2012 ha convertido los convenios laborales en papel mojado (Aragóns 2012; López Gómez y López Lara 2012). La aplicación de estos acuerdos de mínimos podrá ser suspendida por las empresas con extrema facilidad, dejando a los trabajadores del sector en las CCAA con convenios de Arqueología vigentes igual de desprotegidos que sus compañeros de otras autonomías que carecen de estas regulaciones.

La eventualidad y temporalidad en la contratación es uno de los principales problemas del empleo por cuenta ajena en Arqueología comercial, ya que su actividad depende totalmente de los ciclos de la construcción. Además, debido a la necesidad de realizar ciertos trabajos en los meses más favorables para trabajar al aire libre, la ocupación sufre una marcada estacionalidad con picos veraniegos en la oferta de empleo e inactividad generalizada en invierno. Esta situación puede relacionarse con la baja tasa de contratos fijos o indefinidos y con el predominio de contratos por obra y servicio (*vid.* Parga-Dans 2010b). Al mismo tiempo, los profesionales autónomos se

ven obligados a afrontar con incertidumbre sus compromisos laborales a corto plazo, viéndose obligados a darse de alta en la Seguridad Social de manera intermitente, añadiendo así angustia y descontrol a su planificación profesional.

En el caso de algunas CCAA, como la Comunidad de Madrid o el Principado de Asturias, a todo lo anterior se suma la inexistencia de normativas o reglamentos que desgranen la aplicación de las leyes autonómicas de Patrimonio. Tal situación favorece la arbitrariedad en la Gestión del Patrimonio arqueológico en aspectos como la definición de los criterios de calidad exigidos en los trabajos o los requisitos necesarios para dirigir intervenciones arqueológicas. Esta falta de regulación aumenta más si cabe la inseguridad en el ambiente laboral cotidiano, amplificando el desasosiego de los profesionales.

Trabajar en Arqueología comercial se ha convertido en una ocupación con la que no es posible trazar planes de vida a largo plazo. La dura competencia que vive el sector en estos últimos años, con un alocado desplome de los precios, repercute directamente en los trabajadores en forma de peores condiciones laborales y salarios cada vez más bajos. El trabajador se encuentra generalmente indefenso, ya que no muy frecuentemente conoce y exige sus derechos laborales más básicos. Debido a la temporalidad y a la desunión del colectivo no abundan asociaciones profesionales ni representación sindical dentro de las empresas, por lo que el trabajador está completamente a merced del libre mercado de empleo.

Todo ello termina por crear una desmotivación generalizada de los trabajadores. La ilusión inicial y la pasión vocacional son doblegadas por la resignación frente a la precariedad (González Álvarez 2013). Entre los trabajadores más veteranos, muchos abandonan el sector en busca de otras alternativas laborales que les ofrezcan el sustento y la seguridad necesaria para emprender proyectos vitales básicos, como formar una familia o pensar en la jubilación. Así, el mercado de empleo arqueológico sufre una continua pérdida de técnicos veteranos que serán remplazados por recién egresados de las universidades, quienes obtendrán peores contratos que los existentes una década atrás. Del

mismo modo, la desmotivación de los arqueólogos más hartos repercute en la minuciosidad y eficiencia de su trabajo. Con tan negro horizonte, ¿sirve de algo trabajar bien? Esta situación influye negativamente en los resultados investigadores de la Arqueología comercial, con una predecible pérdida de calidad.

6. Tocando fondo

Ante la insostenible situación sociolaboral de la Arqueología comercial en el estado español, ya en plena vorágine constructiva y urbanizadora se alzaron algunas voces premonitorias de quienes clamaban por un cambio en el modelo de la Arqueología comercial. Estaba en juego garantizar la eficacia de la Gestión del Patrimonio arqueológico y, lo que es más importante, la dignidad, la integridad y el bienestar del colectivo de trabajadores más importante de la Arqueología del estado español, al que se había llegado a calificar de *invisible* (Ruiz Zapatero 2005: 256).

Así, se identificaron algunos problemas estructurales y se propusieron cambios, a veces acompañados de protestas y movilizaciones. Este camino propició algunos logros parciales, como la implantación del primer convenio sectorial de Arqueología en Cataluña, suscrito por CCOO⁴ en 2007, frente al rechazo de CNT y buena parte de los trabajadores (García Casas 2007; Grup de Treball CCOO 2005). Al convenio catalán le seguirían el gallego en 2009, el castellano-leonés en 2010 y el valenciano en 2013. Otros movimientos similares condujeron a la convocatoria de reuniones y asambleas en distintos puntos del estado, que llevarían a la creación de plataformas y asociaciones profesionales o de trabajadores, como la

4 La legislación española dicta que en aquellos ámbitos laborales donde la representatividad de los trabajadores no esté clara—esto es, que no se hayan celebrado elecciones sindicales—, los sindicatos mayoritarios—a nivel estatal o autonómico—pueden actuar unilateralmente como representantes de los trabajadores. Es bien significativo que en las cuatro CCAA que hasta ahora cuentan con convenio vigente—Cataluña (CCOO); Galicia (CIG); Castilla y León (CCOO); Comunidad Valenciana (CCOO)—, la forma de representación (*sic*) de los trabajadores haya seguido este camino. De manera general, la participación real de estos en los procesos de negociación fue mínima, y sus opiniones no tuvieron peso en la redacción final del articulado.

Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología (AMTTA), la *Asociación de arqueólogos de Castilla y León* (ArqueoCyL) o las secciones sindicales de Arqueología de CNT en Córdoba y Barcelona. Entre las motivaciones compartidas por estos colectivos encontramos una percepción generalizada del continuo deterioro de la posición sociolaboral de los arqueólogos, debido a la precariedad laboral, a la inexistencia de convenios sectoriales o regulaciones detalladas de la actividad arqueológica y al escaso reconocimiento social e institucional de la actividad arqueológica profesional.

A comienzos de la presente década la situación para la Arqueología comercial en el estado español parece haber tocado fondo. El estallido de la “burbuja inmobiliaria” ha generado un parón en seco de la construcción y las inversiones públicas en infraestructuras, ámbitos que promovían buena parte de la actividad productiva del sector. A esta situación de crisis se suman las medidas de austeridad y recortes en las inversiones públicas, tanto en infraestructuras como en I+D+i, lo cual no puede sino conducirnos al abismo (Moro-Martín 2012; Navarro *et al.* 2011; Santamaría *et al.* 2013). Si el proceso no era suficientemente grave para las poco halagüeñas posibilidades productivas y de empleabilidad en el sector de la Arqueología comercial, los cambios legislativos en regulación laboral y coberturas sociales de los trabajadores españoles siguen empeorando debido a las medidas adoptadas por las administraciones públicas (Aragonés 2012).

Las amenazas para el futuro de la Arqueología comercial se multiplican, viniendo de los ámbitos más insospechados. Así, recientemente el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo la reforma urgente de la Ley 10/1998 de Patrimonio Histórico. El análisis de la nueva *Ley 3/13, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid* ha generado gran preocupación en el sector (Almansa 2013; AMTTA 2012; Fernández de Córdoba 2012; Yáñez 2013), pues el rasgo más reseñable de los cambios que contiene es la creciente desprotección del Patrimonio Arqueológico regional con la supresión de la Arqueología Preventiva en aquellas zonas

donde no se conozcan previamente yacimientos arqueológicos. Lo cual nos hace contemplar nuevos factores negativos que reducirían aún más el volumen de empleo en la Arqueología comercial en esta región. Más aún, se corre el riesgo de que la Comunidad de Madrid funcione una vez más un campo de pruebas en el que las políticas neoliberales del Partido Popular sean puestas en práctica, extendiéndose con posterioridad al resto del estado español (Carmona *et al.* 2012).

Esta dura panorámica hace que los trabajadores del sector de la Arqueología comercial en el estado español tengan un difícil porvenir. La mayoría de nuestros compañeros han perdido su empleo y engrosan las listas del paro; otros han emigrado; y los pocos que aún conservan sus puestos de trabajo lo hacen en medio de la incertidumbre, viendo cómo sus condiciones laborales y perspectivas de futuro empeoran día a día.

7. ¿Hay un futuro mejor o distinto?

A la vista de este desolador panorama, no parece probable que el sector productivo de la Arqueología comercial vaya a recuperarse pronto, ni en unas condiciones cercanas a las del período previo a la crisis. Ante la dramática situación que sufren la mayoría de nuestros compañeros, una línea fundamental de análisis ha de considerar que en estos momentos la principal problemática a la que se enfrentan los trabajadores de la Arqueología comercial no es particular sino colectiva: de clase. Por lo tanto, no parece pertinente desligar por completo el análisis de nuestros propios problemas del auge del *precariado* a nivel general (Standing 2013). No es comprensible que los desajustes de la crisis financiera actual, provocados por la especulación financiera, los abusos y la avaricia desmedida de banqueros y políticos corruptos, deba solucionarse con recortes en el gasto público y el retroceso del estado del bienestar, en paralelo a la criminalización de las protestas legítimas de los trabajadores. Las coberturas sociales y las garantías de protección frente al desempleo han de mantenerse garantizadas por el estado. Por lo tanto, el lugar de los trabajadores de la Arqueología comercial,

como uno de tantos colectivos gravemente damnificados por la crisis, ha de estar en estos momentos en la calle, para reclamar una salida justa y equitativa a la situación económica actual, que no deja de agravarse por las insolidarias y equivocadas políticas económicas del gobierno actual.

Entrando en el plano laboral más concreto de nuestro sector, los acontecimientos que han derivado en la actual crisis demuestran cómo la consideración de muchas de las apuestas y reclamaciones que se venían realizando desde agentes de nuestro entorno –como las asociaciones de trabajadores (AMTTA 2008; Benítez de Lugo *et al.* 2012; CNT-Barcelona 2012; CNT-Córdoba 2010, 2011) o algunas voces aisladas (Díaz del Río 2000; Moya Maleno 2010)– habrían supuesto cambios en nuestro modelo sectorial que garantizarían una mayor fortaleza del sector para mantener la carga de trabajo y el volumen de empleo en la Arqueología comercial española. El modelo extremadamente liberalizado del sector no funciona. A lo largo de los años de vorágine constructiva e inmobiliaria, nuestra actividad no ha servido más que de comparsa en el proceso especulador generado en su entorno. Así, se han generado ingentes cantidades de expedientes administrativos y colecciones de materiales que nadie estudiará jamás. Por lo tanto, es necesario que desde nuestra disciplina realicemos una labor profunda –pero urgente– de crítica acerca del modelo de Gestión del Patrimonio que ha llevado al actual sistema productivo de la Arqueología comercial al colapso.

En primer lugar es indispensable que nos replanteemos la función pública de los arqueólogos en los contextos de obras o planificación urbanística, y que exploremos nuevas facetas de nuestro trabajo que no sean esclavas del ladrillo. El recientemente ratificado Convenio de La Valetta sugiere algunas de las vías a seguir en este sentido, como la socialización de la Arqueología, la educación o la investigación de los bienes arqueológicos afectados por el desarrollo urbanístico y las obras públicas. En esta línea, uno de los objetivos prioritarios para garantizar un futuro para la Arqueología comercial es potenciar la visibilización de la disciplina ante la sociedad del estado español. Debemos

hacer partícipes a nuestros conciudadanos de los resultados y la cotidianeidad de nuestra labor profesional, para combatir la invisibilidad de nuestro trabajo, incluso ante los propios vecinos de las calles aledañas a nuestras intervenciones. Por ello, es fundamental potenciar los programas de Arqueología Pública que socialicen los resultados de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en los ámbitos público y privado (Almansa 2011; Ayán Vila *et al.* 2012).

Del mismo modo, es necesario recomponer nuestro marco habitual de actividad sobre unos pilares más sólidos. Hoy más que nunca, resulta imprescindible sentar las bases de una verdadera carrera profesional en Arqueología comercial, con empleos dignos y estables. Lo cual pasa por la aprobación de convenios sectoriales razonables, que garanticen la dignidad de los trabajadores y pongan fin a la competencia desleal en el sector. Tales medidas han de verse precedidas por la derogación de la “contrarreforma” laboral aprobada mediante el RD-Ley 3/2012 por el gobierno del Partido Popular. Sólo sobre la base de un empleo de calidad se podrá clamar por la eficiencia o la productividad del sector.

Es muy importante poner en claro cuál es la situación de la Arqueología comercial en estos momentos, cuáles son los problemas, cuáles las vías de solución. Debemos llamar la atención sobre tales problemas, ante el público general y sobre todo, frente a las futuras promociones de arqueólogos que en estos momentos inician sus estudios superiores. De cara a los futuros egresados de las nuevas titulaciones de Arqueología, es necesario examinar la idoneidad de los programas formativos actuales y reformarlos a la luz de las exigencias en capacitación y experiencia laboral que se reclaman desde la Arqueología comercial (González Álvarez 2013; Hernando Álvarez y Tejerizo 2011; Tejerizo y Hernando Álvarez 2012), sin perder de vista que la formación universitaria debe ser completa e integral, combinando conocimientos teóricos y destrezas prácticas (Ruiz Zapatero 2009: 228). Así, aunque se evidencie la necesidad de actualizar algunos puntos de sus planes de estudio para adecuar la capacitación de los jóvenes titulados a las labores

habituales en Arqueología comercial, la formación superior no debe plegarse a las exigencias formativas utilitaristas del sector privado. La Universidad debe potenciar el espíritu crítico de las nuevas generaciones de arqueólogos (Estrat Jove 2012: 122) y debe desarrollar intelectuales con un pensamiento científico y reflexivo (Ferreiro Baamonde 2010: 126).

Igualmente, percibimos que la investigación académica sigue considerando a la Arqueología comercial como esa actividad menor de la disciplina arqueológica. Sin razones justificadas se cuestionan sus métodos de trabajo o la carencia de intereses investigadores de sus intervenciones, más allá de la elaboración de literatura gris que difícilmente redundará en publicaciones científicas o divulgativas. No se valora en su justa medida el esfuerzo invertido en dichos trabajos, pese a las limitaciones estructurales de las que adolece la Arqueología comercial. Sus posibilidades investigadoras se ven cercenadas por la competencia furibunda entre empresas, por la ineficacia de la Administración, por la inexistencia de regulaciones mínimas y por la aparente indiferencia de la Academia frente a sus problemas.

Por encima de todo eso, hay que subrayar que la Arqueología comercial ha propiciado un cambio revolucionario en nuestro conocimiento sobre el pasado. En regiones como la Comunidad de Madrid, sus actividades han propiciado un vuelco total en nuestro conocimiento sobre el la Edad del Hierro (e.g. Torres Rodríguez 2013) o la Alta Edad Media (e.g. Vigil-Escalera 2009), por citar algunos casos paradigmáticos. Las excavaciones en extensión realizadas en el marco de grandes infraestructuras o Planes de Actuación Urbanística comienzan a ser las principales protagonistas de las últimas síntesis históricas de esta región, ejemplo análogo a otros períodos y territorios del estado español. Pero nadie ha de olvidar que, dada la situación estructural expuesta en este trabajo, buena parte de ese conocimiento ha sido generado en un contexto de explotación de los profesionales de la Arqueología comercial.